

QUEJOSA: [REDACTED]

AMPARO DIRECTO

CC. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO EN TURNO.

SIADO [REDACTED], en mi carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la parte demandada [REDACTED]

personalidad que tengo debidamente reconocida ante la autoridad responsable, por lo que en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo pido sea admitida en esos términos, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en la Avenida [REDACTED] número [REDACTED] interior [REDACTED], en la Colonia [REDACTED] de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; autorizando en términos amplios de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a los CC. Licenciados [REDACTED] con cédula profesional número [REDACTED] [REDACTED] con cédula profesional [REDACTED]; y [REDACTED] con cédula profesional número [REDACTED] y en términos de lo dispuesto por el último párrafo del numeral invocado autorizo para oír y recibir notificaciones así como realizar consultas del expediente a los CC. [REDACTED]

[REDACTED] de manera indistinta; solicitando además que, de no haber inconveniente legal, se permita el acceso al expediente electrónico a través del Usuario Registrado en el Portal del Poder Judicial de la Federación como [REDACTED]; Ante ustedes, con la atención y respeto debidos, comparezco y expongo:

[REDACTED]

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 170, 171 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, por medio del presente escrito, a nombre de la parte que represento, solicito el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL por los actos y contra la autoridad que señalo posteriormente, y a efecto de cumplir en sus términos con lo dispuesto por el artículo 175 de la Ley antes citada, manifiesto:

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DE QUIEN PROMUEVE EN SU NOMBRE

[REDACTED] con el domicilio que ha quedado señalado en el proemio del presente escrito, por conducto del apoderado general para pleitos y cobranzas que suscribe el presente escrito.

II.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TERCEROS INTERESADO:

[REDACTED] con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la finca marcada con el número [REDACTED] de la Calle [REDACTED] en la Colonia [REDACTED] en la ciudad de Guadalajara, JALISCO, domicilio señalado por la tercero interesado en el juicio natural del que emana el acto reclamado.

III.-AUTORIDAD RESPONSABLE:

LA QUINTA SALA DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad.

IV.- ACTO RECLAMADO:

Sentencia de fecha [REDACTED] dictado en el Toca bajo el Número de Expediente [REDACTED] de su índice.

V.- FECHA DE NOTIFICACIÓN:

Manifiesto que la sentencia que constituye el acto

[REDACTED]

reclamado me fue notificado  
personalmente el día [REDACTED]

VI.- PRECEPTOS QUE CONTIENEN  
LA VIOLACIÓN DE DERECHOS  
HUMANOS CUYA VIOLACIÓN SE  
RECLAMA:

Artículos 14, 16 Y 17 de la  
Constitución Federal.

OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DEL AMPARO

Como se afirmó anteriormente, la resolución reclamada de fecha [REDACTED] fue notificada a mi representada con fecha del [REDACTED] por lo cual, el término de quince días que para ese efecto se concede a mi representada por el artículo 17 de la Ley de Amparo, corre a partir del [REDACTED] y tiene como término fatal el día [REDACTED] ello, descontando los días inhábiles; por lo cual, indudablemente la demanda de amparo que nos ocupa se propone en legal término.

Ahora bien, me permito señalar que la sentencia definitiva que en este acto se impugna causa a mi representada los siguientes:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

ÚNICO.- Con motivo del CONSIDERANDO VI y de la PROPOSICIÓN SEGUNDA de la sentencia que se recurre, se viola en perjuicio de mi representada lo contenido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la sentencia de marras no se encuentra debidamente fundada ni motivada y es carente de claridad, precisión y congruencia, tanto interna como externamente; al determinar una responsabilidad civil subjetiva extracontractual sin haber realizado un estudio exhaustivo de las constancias de autos apoyándose en sus



[REDACTED]

consideraciones en indicios que resultan ambiguos, ignorando la causal excluyente de responsabilidad que prevé el artículo 1910 del supletorio Código Civil Federal, la forma y consecuencias de las violaciones que se refieren, se exponen y acreditan en los términos del presente concepto de violación.

La sentencia definitiva materia de la presente demanda de garantías la emite la responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el H. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el expediente del juicio de amparo tramitado con el [REDACTED] del índice de ese Tribunal, en la cual se resolvió que se dejara insubsistente la sentencia de fecha [REDACTED], toda vez que la acción que pretendió ejercitar la accionante era la de responsabilidad civil y no la de cumplimiento de contrato, como lo manifestó la accionante en el capítulo de prestaciones de su escrito inicial de demanda.

En efecto, de los lineamientos de la ejecutoria se desprende que la responsable deberá analizar los elementos de la acción planteada y atendiendo a las pruebas que obran en el expediente resolver si acredita o no la acción, concediéndole plenitud de jurisdicción para tales efectos.

En la parte conducente de la sentencia que se recurre (CONSIDERANDO VI mismo que trascendió al sentido de las proposiciones) la A quem expresamente consideró que la tercero interesada le asistía la razón y, en consecuencia, que demostró los elementos de su acción, con la siguiente consideración:

"Entonces bien, se puede concluir que, para la procedencia de la presente acción, tenemos que deben de concurrir los siguientes elementos:

- 1.- El incumplimiento objetivo o material, que consiste en la infracción al deber, sea mediante la incumplimiento de un contrato, sea a través de la violación del deber general o específico establecido en una norma jurídica.
- 2.- Un factor de atribución de responsabilidad (subjetivo) es decir deber genérico de no dañar, esto es, una razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto señalado como deudor.

3.- El daño; y

4.- Una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño.

...

...VI.- Analizado que es el acervo probatorio allegado por las partes y confrontado con las pretensiones de cada una de ellas, tenemos que para quienes esto reservemos (así) en la especie la accionante sí logró demostrar los elementos de la acción que ejerce a saber:

Por lo que ve a el incumplimiento objetivo, o material, que consiste en la infracción al deber, sea mediante el incumplimiento de un contrato, sea a través de la violación del deber general o específico establecido en una norma jurídica, tenemos que el mismo ha quedado demostrado en razón como se advierte del procedimiento la accionante acreditó que el actuar del cajero y gerente de la institución demandada no actuaron conforme a normatividad alguna que les exigiere que una vez recibida una cantidad de dinero por parte del personal del banco, se tenga que devolver a fin deirla recibiendo de manera fraccionada conforme se vaya aplicando cada depósito pretendido por el cliente del banco como lo señala la parte demandada, por lo que se considera que en efecto se violó lo establecido en el ordinal 77 de la Ley de Instituciones de Crédito el cual dice:

"Artículo 77.- Las instituciones de crédito prestarán los servicios previstos en el artículo 46 de esta Ley, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la adecuada atención a los usuarios de tales servicios."

Del artículo en comento, tenemos que la ley como lo señala la parte actora en el procedimiento de origen establece que se debe de procurar sus servicios procurando sanas prácticas que propicien la seguridad de las operaciones que realiza, sin que en el presente caso se hubiere demostrado que ello así aconteció, luego, cobra aplicación lo estipulado en el diverso normativo 80 de la Ley que rige a las instituciones de crédito, el cual para lo que al caso importa señala:

"La institución responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por la falta de cumplimiento en las condiciones o términos señalados en el fideicomiso, mandato o comisión, o la Ley."

En virtud de lo anterior, es que se estima que se encuentra acreditado el primero de los elementos de la acción.

Por lo que ve al segundo de los elementos atiende a un factor de atribución de responsabilidad (subjetivo), es decir, deber genérico de no dañar, estos es, una razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto señalado como deudor, el mismo se considera íntimamente ligado al anterior, ya que, no se evidenció que la demandada hubiere actuado con el debido deber de cuidado, procurando la seguridad del cliente o proporcionando los elementos necesarios para que las operaciones que se realizan en sus instalaciones, pues como se advierte de la averiguación previa acompañada al escrito inicial de demanda, el robo ocurrió dentro de las instalaciones de la demandada ello después de que le fuera devuelta la cantidad de dinero que la parte actora pretendía depositar por parte de los empleados de la parte reo, lo que desde luego genera en el ánimo de quienes esto resolvemos un factor de responsabilidad por parte de la demandada que le obliga a reparar el daño que sufrió la accionante, al no cumplir con su deber de cuidado.

Por lo que ve al tercero de los elementos atinente al daño el mismo quedó demostrado al no haber sido un hecho controvertido entre las partes, puesto que ambas reconocen que fue asaltado el accionante dentro de las instalaciones del banco demandado, privándolo de una cantidad de dinero, la cual, le había sido devuelta por el personal de la demandada.

Por lo que ve al último de los elementos de la acción, referente a una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño, nuevamente se estima privado, úes, es inconcuso que el hecho ilícito que sufrió la parte actora, ocurrió en razón de que le fue devuelto el dinero, pues, en caso contrario los asaltantes no hubieran podido lograr su objetivo, yunque el numerario hubiera estado en resguardo de la institución -atrás del vidrio que cuentan los cajeros para su protección lo que es un hecho notorio y público por lo que es válido que este órgano jurisdiccional lo invoque- dado que como se ha señalado y ha sido reconocido por las partes, en algún momento si estuvo en poder del cajero de la institución y le fue devuelto por esta a quien sufrió el asalto, de ahí que se pueda



[REDACTED]

afirmar que si existió una relación de causa efecto entre daño sufrido y el accionar de los empleados del banco."

Sin embargo, la quejosa considera que la sentencia pronunciada por la responsable incurre en violación de los principios de exhaustividad, congruencia y debida motivación y fundamentación.

En efecto, la responsable incurre en infracción del principio de exhaustividad al considerar que, el actuar del cajero y de la gerente, no actuaron conforme a la normatividad, y considera que se violentó lo ordenado por el artículo 77 de la Ley de Instituciones de Crédito, dispositivo que no establece de manera puntual el incumplimiento a que alude la responsable, pues se trata de una norma general que debió verificarse con las disposiciones regulatorias que emiten el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tal como lo dispone el artículo 6° de la Ley de Instituciones de Crédito.

De las consideraciones de la responsable no se desprende que haya verificado la regulación de los usos y prácticas bancarios, los cuales son regulados a través de las reglas de operación de una institución de crédito, para que, con apoyo en esas regulaciones, pudiera calificar si la quejosa incurrió en el incumplimiento de alguna normatividad como lo establece en el sentido de su fallo, por lo que, tal violación, irroga a la quejosa la violación de su derecho humano del debido proceso por falta de motivación y fundamentación.

Tenemos que la operación bancaria se rige, además de la ley especial, por las disposiciones que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito.

[REDACTED]

Esas disposiciones han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, modificadas mediante Resoluciones publicadas en el citado Diario Oficial el 3 y 28 de marzo, 15 de septiembre, 6 y 8 de diciembre de 2006; 12 de enero, 23 de marzo, 26 de abril y 5 de noviembre de 2007; 10 de marzo, 22 de agosto, 19 de septiembre, 14 de octubre y 4 de diciembre de 2008; 27 de abril, 28 de mayo, 11 de junio, 12 de agosto, 16 de octubre, 9 de noviembre, 1 y 24 de diciembre de 2009; 27 de enero, 10 de febrero, 9 y 15 de abril, 17 de mayo, 28 de junio, 29 de julio, 19 de agosto, 9 y 28 de septiembre, 25 de octubre, 26 de noviembre y 20 de diciembre de 2010; 24 y 27 de enero, 4 de marzo, 21 de abril, 5 de julio, 3 y 12 de agosto, 30 de septiembre, 5 y 27 de octubre y 28 de diciembre de 2011; 19 de junio, 5 de julio, 23 de octubre, 28 de noviembre y 13 de diciembre de 2012; 31 de enero, 16 de abril, 3 de mayo, 3 y 24 de junio, 12 de julio, 2 de octubre y 24 de diciembre de 2013; 7 y 31 de enero, 26 de marzo, 12 y 19 de mayo, 3 y 31 de julio, 24 de septiembre, 30 de octubre, 8 y 31 de diciembre de 2014; 9 de enero, 5 de febrero, 30 de abril, 27 de mayo, 23 de junio, 27 de agosto, 21 de septiembre, 29 de octubre, 9 y 13 de noviembre, 16 y 31 de diciembre de 2015; 7 y 28 de abril, 22 de junio, 7 y 29 de julio, 1 de agosto, 19 y 28 de septiembre y 27 de diciembre de 2016; 6 de enero, 4 y 27 de abril, 31 de mayo, 26 de junio, 4 y 24 de julio, 29 de agosto, 6 y 25 de octubre, 18, 26 y 27 de diciembre de 2017; 22 de enero, 14 de marzo, 26 de abril, 11 de mayo, 26 de junio, 23 de julio, 29 de agosto, 4 de septiembre, 5 de octubre, 15 y 27 de noviembre de 2018, 15 de abril, 5 de julio, 1 de octubre, 1, 4 y 25 de noviembre de 2019, así como 13 de marzo, 9 de abril, 9 de junio, 21 de agosto, 12 de octubre, 19 de noviembre y 4 de diciembre de 2020; 21 de mayo, 18 de junio, 20 y 23 de julio, 6 de agosto 23 de septiembre, 15, 30 y 31 de diciembre de 2021, 13 y 27 de mayo, 22 de junio, 2 de septiembre; así como 19 de octubre de 2022.



[REDACTED]

En la especie, resulta aplicable a la naturaleza de las operaciones motivo de la litis lo dispuesto por el artículo 287 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, cuyo texto es del tenor literal siguiente:

**"Artículo 287.-** Las Instituciones, en la **tramitación de depósitos** y pago de contribuciones o servicios **que reciban de su clientela o del público en general en ventanillas, deberán imprimir en las correspondientes fichas de depósito y comprobantes la cantidad recibida**, debiéndose identificar la Institución, oficina y, en su caso, la ventanilla en que la operación haya sido tramitada, con la rúbrica del empleado responsable, de tal forma que los usuarios cuenten con la adecuada comprobación."

Como se desprende del numeral transcrito, tenemos que es obligación de la institución bancaria la de imprimir en las correspondientes (cada una) fichas de depósito el comprobante de la cantidad recibida, debiendo identificar la oficina y la ventanilla en la que la operación haya sido tramitada.

Lo anterior significa que, de acuerdo con los hechos de la demanda, que el banco estaba obligado a recibir la suma de dinero que deseara depositar el cuentahabiente y a emitir por cada depósito la ficha correspondiente, o sea, debe recibir cada uno de los depósitos que desee realizar el cuentahabiente, pero no de manera global, ya que de ninguna manera se puede ingresar una suma de dinero de manera global si no es que la totalidad del depósito sea para la misma operación, en esa hipótesis, se emitiría la ficha del depósito correspondiente por el monto global, como si se tratara de una sola operación.

De las constancias de autos se desprende que el cuentahabiente aceptó recibir la suma de dinero que había ingresado originalmente, porque su intención era realizar varios depósitos, por lo que aceptó implícitamente realizar el depósito de las sumas de dinero que pretendía realizar de manera fraccionada y no global, luego entonces, con la confesión judicial expresa en que incurrió en la narración del hecho marcado como segundo en el escrito de demanda, se



9

[REDACTED]

demuestra que hasta ese momento no hubo una infracción a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, por parte de la quejosa, por lo tanto, que no existió una infracción a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Instituciones de Crédito, como lo resuelve la responsable.

Por otra parte, la responsable aduce que en la especie cobra aplicación lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, del cual solo transcribe el párrafo segundo, ya que el texto completo e íntegro dispone lo siguiente:

UNAL DELEGADO  
TESA CIVIL  
DER CIRCUITO  
AM. JESCO.

**"Artículo 80.-** En las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, las instituciones desempeñarán su cometido y ejercerán sus facultades por medio de sus delegados fiduciarios.

La institución responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por la falta de cumplimiento en las condiciones o términos señalados en el fideicomiso, mandato o comisión, o la ley.

En el acto constitutivo del fideicomiso o en sus reformas, se podrá prever la formación de un comité técnico, dar las reglas para su funcionamiento y fijar sus facultades. Cuando la institución de crédito obre ajustándose a los dictámenes o acuerdos de este comité, estará libre de toda responsabilidad."

El precepto invocado por la responsable NO tiene aplicación en la especie, pues como se advierte de su texto esta referido exclusivamente a las operaciones de **Fideicomiso**, lo que no acontece en el presente asunto, pues esa disposición regula la responsabilidad de los delegados fiduciarios, quienes no forman parte del personal de una institución bancaria, como lo dispone el artículo 82 de la ley de la materia que dispone:

**"Artículo 82.-** El personal que las instituciones de crédito utilicen directa o exclusivamente para la realización de fideicomisos, no formará parte del personal de la institución, sino que, según los casos se considerará al servicio del patrimonio dado en fideicomiso. Sin embargo, cualesquier derechos que asistan a esas personas conforme a la ley, los ejercerán contra la institución de crédito, la que, en su caso, para cumplir con las resoluciones que la autoridad competente dicte afectará, en la medida que sea necesaria, los bienes materia del fideicomiso."

Así entonces, la atribuida infracción al artículo 77 de la Ley de Instituciones de Crédito como la actualización de la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 80 de

[REDACTED]

la misma ley, no se actualizan en la especie, la primera disposición porque no establece de manera exacta el supuesto que la responsable le adjudica como incumplimiento, pues le faltó explorar cuales son las prácticas bancarias expresamente reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo tanto, dichas prácticas no están sujetas a apreciación y, por otra parte, la sanción prevista por el artículo 80 de la misma ley solo tiene aplicación para operaciones de Fideicomiso.

Del concepto de violación anterior, tenemos que la sentencia definitiva emitida en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Colegiado, no obstante que la responsable tiene libertad de jurisdicción, incumple con el requisito de congruencia y exhaustividad que debe reunir su sentencia.

Sustenta la violación que se hace valer el criterio judicial que se obtiene de la siguiente Tesis Aislada:

Registro digital: 164826  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Novena Época  
Materias(s): Común  
Tesis: III.1o.T.Aux.1 K  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010, página 2714  
Tipo: Aislada

**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO EL QUEJOSO ARGUMENTE INOBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN EL AMPARO DIRECTO, BASTA QUE EN AQUELLOS MENCIONE CUÁLES FUERON LAS CONSIDERACIONES OMITIDAS.**

Con base en el principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el juzgador aplica el derecho, cuando el quejoso argumente inobservancia a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia impugnada en el amparo directo, basta que en los conceptos de violación mencione cuáles fueron las consideraciones omitidas, es decir, es suficiente con que contengan la expresión clara de la causa de pedir, en aras de no obstaculizar el acceso efectivo a la jurisdicción previsto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, no deben exigirse mayores requisitos, como sería precisar qué parte específicamente de los agravios hechos valer dejó de atenderse; cómo es que en el proceso afecta dicha omisión e incluso, que deban expresarse silogismos lógico-jurídicos a fin de evidenciar la transgresión a la esfera de derechos del promovente, pues de hacerlo se constituiría una carga procesal excesiva en perjuicio de éste.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.



10

[REDACTED]

Amparo directo 77/2009. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretario: José Luis Alvarado García.

Nota: Por ejecutoria del 11 de septiembre de 2017, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito declaró inexistente la contradicción de tesis 20/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

En esa virtud, las consideraciones de la responsable sobre lo que, a su juicio, se acredita la procedencia de la acción de responsabilidad civil subjetiva extracontractual, en cuanto al considerando del primer elemento que consiste en: "1.- El incumplimiento objetivo o material, que consiste en la infracción al deber, sea mediante la incumplimiento de un contrato, sea a través de la violación del deber general o específico establecido en una norma jurídica.", debe tenerse por demostrada la violación en que incurrió por falta de congruencia y exhaustividad de sus consideraciones.

Por otra parte, en cuanto a las consideraciones de la responsable sobre lo que a su juicio se acredita el segundo de los elementos de la acción al considerar:

Por lo que ve al segundo de los elementos atiende a un factor de atribución de responsabilidad (subjetivo), es decir, deber genérico de no dañar, estos es, una razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto señalado como deudor, el mismo se considera íntimamente ligado al anterior, ya que, no se evidenció que la demandada hubiere actuado con el debido deber de cuidado, procurando la seguridad del cliente o proporcionando los elementos necesarios para que las operaciones que se realizan en sus instalaciones, pues como se advierte de la averiguación previa acompañada al escrito inicial de demanda, el robo ocurrió dentro de las instalaciones de la demandada ello después de que le fuera devuelta la cantidad de dinero que la parte actora pretendía depositar por parte de los empleados de la parte reo, lo que desde luego genera en el ánimo de quienes esto resolvemos un factor de responsabilidad por parte de la demandada que le obliga a reparar el daño que sufrió la accionante, al no cumplir con su deber de cuidado.

Tal consideración también está afectada de falta de congruencia y exhaustividad, en atención a que la responsable atribuye una falta de cuidado por parte del cajero y la gerente de la quejosa al no procurar la seguridad del cliente por haber ocurrido el robo dentro de las instalaciones de la quejosa.

[REDACTED]

De esa consideración, se infiere que la responsable asume que la devolución del dinero a depositar trajo como consecuencia que el cliente sufriera el robo de su dinero, hipótesis que no tiene sustento en los hechos narrados por la accionante ni en las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio.

En cambio, del análisis de la responsable resulta contraria a la presunción que se desprende de los hechos, que de los testimonios de las personas que se encontraban en la instalaciones de la quejosa al momento de ocurrir el robo todos manifestaron que la persona que iba a depositar estuvo llamando por teléfono y gritaba que traía [REDACTED] de pesos.

ESTADO UNIDOS  
FEDERAL DE MEXICO  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA  
EN MATERIA DE FALSA  
ZAPATO

Las acciones de la accionante no cumplen con el principio de deber de cuidado, ya que es un hecho notorio que está prohibido hacer uso del teléfono celular mientras se encuentre en las instalaciones de una institución bancaria.

En efecto, como lo dispone el artículo 1306 del Código de Comercio, el juzgador debe analizar los hechos y según su naturaleza conocer la verdad de los hechos, que en la especie es atribuir a un sujeto la falta de cuidado o negligencia, para que con base en ese estudio se pueda determinar si la víctima actuó negligentemente, es decir, cuando realiza u omite culposamente realizar los actos encaminados a evitar o disminuir el daño.

Lo anterior es de trascendencia en el presente juicio toda vez que en el artículo 1910 del supletorio Código Civil Federal, se establece como causa de exclusión de la responsabilidad civil la culpa o negligencia inexcusable de la víctima.


La responsabilidad civil subjetiva se funda en un elemento de carácter psicológico, ya sea porque se comete una acción dañosa o porque se incurre en descuido o negligencia.



11

[REDACTED]

En la especie, la responsable establece que actualiza que la conducta del cajero y la gerente actualizan la hipótesis de descuido o negligencia, al no haber proporcionado los elementos de seguridad necesarios para las operaciones que se realizan en sus instalaciones.

 INCURRE en falta de exhaustividad la responsable al atribuir un actuar negligente a los empleados de la quejosa sin sustento, pues, como se hace valer en los párrafos precedentes las operaciones motivo de la litis se apegaron a dispuesto por el artículo 287 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito.

En efecto, con relación a la seguridad de las operaciones bancarias también se encuentra regulada en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, por lo que para poder establecer que elemento se incumplió con la obligación de proporcionar los necesarios para las operaciones que era del interés del accionante, se debió fundar en esas disposiciones, lo que responsable incumplió, pues su consideración no identifica cual o cuales elementos de seguridad fueron incumplidos por los empleados de la quejosa.

Ilustran las medidas de seguridad que debe observar un banco las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, que en lo particular establecen:

"Capítulo XIII

De las Medidas Básicas de Seguridad a que se refiere el Artículo 96 de la Ley

**Artículo 339.-** Las Instituciones deberán establecer e implementar en todas sus Sucursales y Módulos Bancarios, las siguientes medidas mínimas de seguridad y protección:

I. Dispositivo blindado para la protección de efectivo y valores con mecanismo de retardo físico o electrónico incorporado. En su defecto, el área donde se ubique el dispositivo blindado para la protección de efectivo y valores deberá contar con un mecanismo de acceso con retardo físico o electrónico.

II. Exhibición de fotografías de personas que presuntamente hubieren cometido algún ilícito en perjuicio de alguna Institución o del Público Usuario.

III. Normativa sobre métodos y límites en el manejo y traslado de valores y efectivo.

[REDACTED]

IV. Procesos de coordinación operativa entre la Unidad Especializada y los cuerpos de seguridad pública, así como, en su caso, entre las referidas instancias y la Sociedad de Apoyo.

Artículo 353.- Las Instituciones deberán establecer mecanismos para evitar el uso de teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación móvil dentro de las Sucursales y Módulos Bancarios, con la finalidad de proteger la integridad y el patrimonio del Público Usuario y personal que labora en ellas."

Como se desprenden de esas disposiciones no se regula de manera especial el supuesto de que habiendo regresado el depósito que pretendía realizar la accionante se deban cumplir con requisitos mínimos de seguridad, pues no existe una disposición que así lo establezca como lo infiere la responsable.

En efecto, el deber de cuidado hubiera sido en la hipótesis de que la accionante hubiera pedido el servicio de seguridad y la quejosa no lo haya atendido adecuadamente, en esa hipótesis no concedida, entonces sí habría la posibilidad de calificar como negligente las conductas de la quejosa, lo que en la especie no acontece.

Por el contrario, la accionante a sabiendas que iba a realizar un depósito de una suma importante de dinero, no guardó el debido cuidado y, en lugar de adoptar una conducta responsable, estuvo hablando por teléfono y gritaba que traía consigo [REDACTED] de pesos, esa conducta debe ser calificada como negligente, por ser violatoria de la disposición que prohíbe hacer uso del teléfono mientras se encuentre en una sucursal bancaria.

Sirve de apoyo a la anterior consideración el criterio judicial que determina que cualquier violación a la ley o las buenas costumbres es fuente de obligaciones extracontractuales:

Registro digital: 174180  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Novena Época  
Materias(s): Civil  
Tesis: IV.1o.C.69 C



12

[REDACTED]

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Septiembre de 2006, página 1532  
Tipo: Aislada

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBJETIVA.

Como fuente de obligaciones de naturaleza extracontractual se determina por la conducta contraria a la ley en sentido amplio o contra las buenas costumbres, en que necesariamente debe existir culpa del autor, ya sea intencional o no.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 487/2005. Magda Elisa Martínez Martínez. 6 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Pérez. Secretario: Jesús Eduardo Medina Martínez.

Tenemos que, de las propias actuaciones ante la autoridad ministerial, quedó demostrado que la accionante incumplió con su obligación de evitar el uso del teléfono celular, lo que permitió que los demás cuentahabientes se enteraron de que traía [REDACTED] de pesos.

La responsable al analizar el hecho relativo a que la accionante estuvo haciendo uso de teléfono celular consideró lo siguiente:

"... como también se desprenden de los testimonios de los testigos presenciales que el propio depositante al estar hablando por teléfono celular, enfrente de la caja que lo atendió, gritaba que traía esa suma de dinero y que no se la querían recibir, tales conductas deben ser calificadas como culposas y negligentes por parte de la víctima, quienes esto resolvemos, **consideramos que si bien esta probado ese hecho -que utilizo por el actor su celular-** no puede considerarse que por tal circunstancia se pueda eximir a la demandada de su responsabilidad, **pues el daño ocurrió en virtud de dos factores como lo son el actuar del cajero y gerente, quienes regresaron el dinero no obstante ya lo había recibido el primero de ellos, y la falta de diligencia a un deber de cuidado como es prestar seguridad a las personas que van a realizar operaciones dentro del banco demandado,** por lo que de haberse cumplido la obligación de proporcionar seguridad hubiera sido inocuo que el actor utilizara su teléfono dentro de la sucursal."

En la especie para poder determinar si hubo responsabilidad civil o no debe atenderse al cumplimiento o incumplimiento de una norma, pues, como se hace valer en los párrafos precedentes, ni el cajero ni la gerente incurrieron en una infracción a alguna norma de cuidado al regresar el dinero para que la accionante lo entregara de acuerdo con sus intereses y, además, tampoco existe una norma que establezca la obligación de prestar seguridad especial cuando las

[REDACTED]

personas realizan una operación en las instalaciones bancarias.

En efecto, de los hechos analizados por la responsable inadvertió que la única persona que fue víctima del asalto fue la propia accionante, pues de las propias constancias que integran la averiguación previa se demuestra que había otras personas al mismo tiempo y en el mismo lugar en donde aconteció el ilícito.

Entonces, si es de relevancia el que la víctima hubiera estado utilizando el teléfono mientras estaba en la ventanilla y que gritara que traía una suma de dinero, toda vez que el robo fue cometido directamente en perjuicio del accionante, es decir, habiendo más personas en las instalaciones de la demandada, el robo solo fue dirigido a quien incumplió con un deber de cuidado, por lo que debió calificarse por la responsable como una conducta negligente de la accionante.

Los elementos para determinar si hubo o no negligencia de la accionante se desprende de las propias constancias de autos, pues están acreditadas las circunstancias personales de la víctima, por lo que no le resultaba perdonable la inobservancia de un deber de cuidado, tal como se desprende del criterio judicial de la siguiente Tesis Aislada:

Registro digital: 203656

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Novena Época

Materias(s): Civil

Tesis: XVI.2o.2 C

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 568

Tipo: Aislada

RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. QUE SE ENTIENDE POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, PARA LOS EFECTOS DE LA. (ARTICULO 1402 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO).

Hay culpa o negligencia cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la conservación de la cosa, o deja de ejecutar los que son necesarios para ello. **Luego, será inexcusable**



[REDACTED]

cuando, de acuerdo a las circunstancias personales de la víctima (edad, capacidad, raciocinio, etcétera), no le sea perdonable la inobservancia de un deber de cuidado que le incumbía; esto es, cuando dadas aquellas características personales no sea factible exigirle que extreme precauciones, a fin de que no sea dañado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 366/95. Transportes Urbanos y Suburbanos Avalos de Guanajuato, S.A. de C.V. 4 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Moisés Duarte Aguiñiga. Secretario: Juan García Orozco.

COLEGIADO  
CIVIL  
CIRCUITO  
LISCO.

A mayor abundamiento, si en la hipótesis de que los hechos hubieren acontecido en cualquier otro lugar, distinto a una sucursal bancaria, en el sentido de que la víctima hubiere estado usando su teléfono y gritara que traía consigo [REDACTED] de pesos, en esa hipótesis, también se hubiera acontecido el robo, pues el lugar -sucursal bancaria- no hace diferencia en cuanto al deber de cuidado que debió observar la víctima aquí accionante.

Por lo anterior, causa el agravio de que se duele la quejosa en cuanto a tener por acreditado el segundo requisito de la responsabilidad civil subjetiva extracontractual, porque los empleados de la quejosa no incurrieron en violación de norma alguna, ni de una práctica bancaria regulada y reconocida por la autoridad competente, como tampoco incurrieron en una conducta negligente al no adoptar medidas de seguridad especiales para un cuentahabiente, por lo que debió advertir la responsable que el ilícito fue provocado por la negligencia y falta de cuidado de la propia víctima, única persona que sufrió el robo de todas las presentes en la sucursal bancaria.

Por otra parte, en cuanto a la demostración del tercer elemento de los requisitos que valora la responsable también incurre en falta de exhaustividad al resolver que se trata de un hecho no controvertido y que se le privo a la accionante "de una cantidad de dinero".

[REDACTED]

De acuerdo con lo ordenado por el artículo 1194 del Código de Comercio, el que afirma está obligado a probar.

La responsable dentro de sus consideraciones para estimar acreditado el daño establecido:

"... afirmación que no se comparte lo anterior porque al efecto cobra relevancia las declaraciones contenidas en la averiguación previa -sobre todo lo afirmado por la otra cajera de la institución bancaria de nombre [REDACTED], ya que la misma se puede desprender que el cajero si termino de contar todo el dinero; por consiguiente, se advertía un posible indicio de que si sabía del monto completo que le había entregado el actor al cajero. Efectivamente, esta otra cajera reconoció de forma literal lo siguiente:

"[...] me percate que el cliente que había llegado traía un deposito muy grande, ya que se veían muchas pacas de dinero, por lo que yo pensé, me va tocar atender a los demás clientes que estaban formados en la unifila, regreso yo a mi caja y continuo atendiendo a los demás clientes en eso mi compañero comenzó a contar los billetes y una vez que ya había contado el dinero le pide al cliente el numero de cuenta a donde van a ser depositado el numerario, y es entonces cuando el cliente le indica que va ser depositado en 17 depósitos diferentes a la misma cuenta, mostrándole una hojita con los depósitos mayores a [REDACTED] pesos cada uno, lo que realizan los clientes de esa forma por cuestiones fiscales, es ahí cundo mi compañero [REDACTED] le indica que como van a ser 17 depósitos diferentes debe de ir el dinero por separado por cada depósito y no todo el dinero en una sola exhibición por lo que el cliente se molesta y comienza a levantar la voz [...]"

De ahí que resulte infundado que no se hubiere demostrado por la parte accionante de cuanto asciende el daño que sufrió."

Como se desprende las consideraciones de la responsable, para tener por acreditado el daño, parte de un "posible indicio", que refiere se desprende del testimonio de una cajera, sin embargo, dicho testimonio no es valorado con otra prueba que adminiculadamente conduzca a la responsable a tener por acreditado el daño, es decir, parte de un posible indicio para considerar demostrado el daño que reclama la accionante.

Del propio testimonio de [REDACTED] no se desprende que haya conocido el monto del depósito a realizar, solo refiere que se trataba de un "deposito muy grande, ya que se veían muchas pacas de dinero", por lo que con esa expresión no pude conceder la responsable que la accionante acreditó el daño que resintió por el robo de su dinero.



Además, debe señalarse que las constancias de una averiguación previa, que la accionante identifica con el número [REDACTED] tales constancias constituyen, en todo caso, datos de prueba contenidos en una averiguación previa y todas y cada una de las actuaciones que obran en dicha carpeta de investigación no son pruebas que puedan servir de fundamento para establecer una condena en este juicio mercantil, sino que son simples datos de prueba, que al no haber sido regulados por un Juez de Control y no haber sido desahogados en la Audiencia de Juicio Oral, carecen de toda validez.

Dicho en forma clara, los datos de prueba de una carpeta de investigación no son pruebas en un juicio mercantil.

El anterior criterio ha sido sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis:

Época: Décima Época  
 Registro: 2006970  
 Instancia: Primera Sala  
 Tipo de Tesis: Aislada  
 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
 Libro 8, Julio de 2014, Tomo I  
 Materia(s): Penal  
 Tesis: 1a. CCLXVIII/2014 (10a.)  
 Página: 161

**"PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LAS ACTUACIONES PRACTICADAS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA, QUE CONSTITUYAN MATERIAL IDÓNEO PARA CONFIGURAR DATOS DE PRUEBA QUE INTEGREN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, NO CONSTITUYEN MATERIAL PROBATORIO PARA DICTAR SENTENCIA.**

Los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, conforme lo disponen los artículos 20, apartado A, fracción III, de la Constitución General y 249 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, no constituyen parte del material probatorio con base en el cual será juzgado el indiciado, salvo aquellas probanzas desahogadas de conformidad con las reglas previstas en el propio código para el anticipo de prueba, o bien, aquellas que ese ordenamiento autoriza a incorporar por lectura durante la audiencia de juicio. Así, las disposiciones legales citadas establecen que las actuaciones realizadas durante la investigación carecen de valor probatorio para fundar la sentencia del imputado, a diferencia de lo que sucede con las diligencias probatorias que se desahogan en la averiguación previa, cuyos efectos subsisten durante todo el proceso penal. Por tanto, el hecho de que pudieran existir pruebas desahogadas en la averiguación previa que sirvan para integrar datos de prueba en la carpeta de investigación, no implica que serán tomadas en cuenta como prueba en el juicio oral."

Amparo en revisión 216/2013. 12 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

[REDACTED]

Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

A mayor abundamiento debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

**Artículo 20.** El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

...

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

Asimismo, el numeral 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece:

**"Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas**

El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. "

Por otro lado, el artículo 358 del mismo ordenamiento señala lo siguiente:

**"Artículo 358.** Oportunidad para la recepción de la prueba. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en este Código. "

Por todo ello, resulta evidente que los datos de prueba que se contienen en una averiguación previa a los que hace referencia la responsable, aún no han sido desahogados ante el Juez de Juicio Oral y por ello no tienen la calidad de prueba, menos aún demuestran el monto del daño como lo afirma el responsable.



No se omite mencionar que todos esos datos de prueba han sido recabados a espaldas de la enjuiciada, por lo que para tener valor en este juicio deben ser desahogados siguiendo las reglas del procedimiento mercantil, respetando en todo momento el derecho de audiencia y de contradicción que debe tener la quejosa, los cuales no se le concedieron en la averiguación previa.



TRIBUNAL  
COLEGIADO  
DEL VIGESIMO  
CIRCUITO

El anterior argumento ha sido sostenido por el siguiente criterio jurisprudencial en Tesis Aislada:

Época: Novena Época  
Registro: 203752  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo II, Noviembre de 1995  
Materia(s): Civil  
Tesis: XX.55 C  
Página: 516

**"COPIAS CERTIFICADAS DE UNA AVERIGUACION PREVIA. VALOR PROBATORIO DE ESTAS EN EL JUICIO CIVIL.**

Para que las actuaciones penales tengan valor probatorio pleno en los juicios civiles, deben administrarse con otros elementos de prueba desahogados en el procedimiento civil, ya que por sí solas, esas documentales únicamente prueban que lo que en dichas copias se certifica, consta efectivamente en la averiguación previa, y, por ello adquiere el valor de indicio, pero son insuficientes para demostrar plenamente la procedencia de la acción intentada por la quejosa."

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo directo 165/95. Rosa María González de del Pino. 31 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Víctor Alberto Jiménez Santiago.

En la especie, lo que se demuestra con las actuaciones ante el ministerio público es que la denunciante declaró ciertos hechos, mas no que sea la verdad de estos.

A mayor abundamiento, como lo dispone el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, las constancias de la averiguación previa demuestran que ante esa autoridad se afirmaron esos hechos, pero las manifestaciones de los particulares no prueban la verdad de lo declarado, dicho precepto es del tenor siguiente:

ARTICULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

[REDACTED]

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.

CUARTO  
E  
DEL  
ZAI

En esa virtud, resulta incongruente y afectada de falta de fundamentación y motivación el valor que le concede la responsable al testimonio de una sola persona para tener por acreditado el monto del daño que reclama la accionante, cuando de acuerdo con las reglas del juicio mercantil ordinario, debió cumplir con la carga de la prueba y aportar los elementos idóneos para establecer el pretendido daño, lo cual no consta en autos.

En cuanto al último de los requisitos que explora la responsable para establecer la relación de causalidad entre el hecho y el daño, tampoco son compartidas por la quejosa las consideraciones de la responsable.

En efecto, la responsable establece que el hecho ilícito ocurrió debido a que le fue devuelto el dinero a la depositante, pues -refiere- que en caso contrario no hubieran podido los asaltantes lograr el objetivo.

Tal hipótesis no es compartida por la quejosa, porque como se hace valer en los párrafos precedentes la sola devolución del depósito no constituye una infracción a norma alguna o practica bancaria, sien embargo, como lo reconoce la propia responsable, existe un hecho demostrado al que no le concede el valor y trascendencia de la infracción cometida por la accionante.

Está reconocido por la responsable que la accionante contrariando las reglas que prohíben el uso de un teléfono en las instalaciones bancarias, estuvo haciendo uso de este, pero no solo lo usó, sino que gritaba que traía [REDACTED] de



[REDACTED]

pesos, tal como se desprende del testimonio de las demás personas que se encontraban al mismo tiempo y en el mismo lugar que el accionante.



COLEGIO  
ACIVIL  
CIRCUITO  
JALISCO

También se desprende de las actuaciones de la carpeta de investigación que solamente fue víctima del robo la accionante, nadie más.

Entonces la responsable debió advertir que el hecho que generó el ilícito fue la falta de cuidado y negligencia de la accionante al infringir la norma que prohíbe el uso del teléfono en la sucursal bancaria y que, contrario a un deber de cuidado, gritaba que traía [REDACTED] de pesos, tan es así que las demás personas que estaban al mismo tiempo en la sucursal sabían de la suma de dinero que afirmó la accionante pretender depositar.

Entonces, la conducta en que incurrió en violación de normas bancarias y que resultó negligente fue la del accionante al no tener el debido cuidado para realizar su depósito.

Contrario a la hipótesis que señala la responsable, tenemos la opuesta, es decir, que la depositante se hubiera abstenido de usar el teléfono en la sucursal bancaria y que, por lo tanto, no hubiere gritado que traía consigo [REDACTED] de pesos, en esa hipótesis, nadie más se hubiera enterado de la suma de dinero que traía el depositante y, en consecuencia, no habría sucedido el robo.

Robustece la anterior hipótesis, el hecho que la pasó inadvertido a la responsable de que, habiendo más cuentahabientes en la sucursal bancaria, al mismo tiempo, solamente el robo fue dirigido a la accionante.

Resulta inconcuso que la conducta de la accionante fue la que generó el ilícito, por no haber respetado las normas bancarias de evitar el uso del teléfono en sus instalaciones, así como por la falta de cuidado al haber gritado que traía

[REDACTED]

[REDACTED] de pesos, para que todos los demás se enteraran de la suma de dinero que portaba.

De acuerdo con el criterio judicial de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe continuación, es obligación de todo resolutor realizar un análisis con base en la "máximas de la experiencia" al señalar:

Época: Décima Época  
Registro: 160064  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.S.o.C. J/36 (9a.)  
Página: 744

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, **deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial** y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que **se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común.**

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruíz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruíz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla.

Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Entonces, tenemos que efectivamente la quejosa se duele de la falta de análisis de la responsable, pues, fue omisa en



hacer la valoración probatoria que exige atender la estructura formal, secuencial, argumentativa y justificatoria de la resolución misma, al tenor de los principios elementales de orden lógico de congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados de manera directa en la exposición de los argumentos que soportan su decisión y, en lo relevante, la justifican con una finalidad persuasiva.



COLEGIADO  
MATERIA CIVIL  
PRIMER CIRCUITO  
JALISCO

Sustenta esta violación el criterio judicial que se obtiene de la siguiente Jurisprudencia:

Época: Novena Época  
Registro: 166586  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXX, Agosto de 2009  
Materia(s): Penal, Común  
Tesis: I.2o.P. J/30  
Página: 1381

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE ATAÑE A LA DECISIÓN JUDICIAL Y NO DEL PROCEDIMIENTO.

La valoración probatoria constituye una formalidad que atañe a los aspectos sustanciales de la decisión judicial y no del procedimiento, en razón de que mientras las formalidades esenciales de éste salvaguardan las garantías de adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, en términos de la jurisprudencia 218 establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta, Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", **la valoración probatoria exige atender la estructura formal, secuencial, argumentativa y justificatoria de la resolución misma, al tenor de los principios elementales de orden lógico de congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados de manera directa en la exposición de los argumentos que soportan la decisión y, en lo relevante, la justifican con una finalidad persuasiva.**

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 113/2009. 24 de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera.  
Amparo directo 160/2009. 28 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: Raúl García Chávez.  
Amparo directo 147/2009. 18 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: Raúl García Chávez.  
Amparo directo 176/2009. 18 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera.  
Amparo directo 179/2009. 18 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretaria: Laura Olivia Sánchez Aguirre.

[REDACTED]

En esa virtud, deberá ordenarse a la responsable que revoque la sentencia que en este acto se combate y dicte una nueva resolución en la que declare procedente la excepción opuesta por la quejosa en cuanto a que, en la especie, se ha actualizado la excluyente de responsabilidad que prevé el artículo 1910 del supletorio Código Civil Federal, porque la accionante incurrió en falta de cuidado y negligencia al momento de encontrarse en la sucursal bancaria.

CUAP

De lo anteriormente expuesto se concluye que la autoridad Responsable conculcó la esfera jurídica de derechos de mi representada, particularmente las garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al resolver, que la accionante acreditó los elementos de la acción de responsabilidad civil subjetiva extracontractual, sin haber realizado un estudio exhaustivo de los hechos, ni fundar y motivar de acuerdo con los hechos de la demanda y las pruebas efectivamente aportadas en el juicio para sostener el sentido de su resolución, por lo tanto, resulta procedente se conceda **EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL** a mi representada, para el efecto de que se deje insubsistente el acto reclamado y en su oportunidad dicte otro en el que, con apego a los hechos que constan de autos, se determine que deberá revocarse la resolución que se impugna, dictando una nueva sentencia en la que, resuelva como procedente la excepción que se desprende del artículo 1910 del supletorio Código Civil Federal, porque opera en el presente asunto la excluyente de responsabilidad que se desprende de dicho numeral.

#### PETITORIO DE SUPLENCIA

Con la sentencia recurrida el A quo dejó de aplicar lo dispuesto por los preceptos legales señalados en los conceptos de violación expuestos, como se evidencia de las constancias procesales, tal y como ha quedado precisado con tales conceptos, por lo que de





TRIBUNAL COLEGIADO  
MATERIA CIVIL  
TERCER CIRCUITO  
N.º 1, JALISCO.

conformidad con lo establecido por el artículo 76 de la Ley de Amparo que aplica, solicito a ustedes señores Magistrados de la manera más atenta que para el caso que llegara a existir alguna deficiencia en los conceptos de violación expresados con este libelo, suplan al compareciente en la deficiencia de expresión y argumentación de los mismos, a efecto de que se le conceda el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión solicitado, petición que formulo de conformidad con el precepto antes indicado su interpretación mediante jurisprudencia definida que a continuación se transcribe:

**SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EL AMPARO EN MATERIA CIVIL HA DEJADO DE SER DE ERICTO DERECHO.** Del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo se infiere la suplencia de la queja deficiente en materia civil cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa; disposición que obliga a los tribunales federales a estudiar el asunto en su integridad, ello, además, de acuerdo con la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo el rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO." se publicó en la página 341 del Tomo VI, Parte Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación; lo que significa que en la actualidad el amparo en materia civil ha dejado de ser de estricto derecho, pues para que el juzgador de amparo esté en aptitud de advertir si existe o no una violación manifiesta de la ley en perjuicio del peticionario de garantías que lo haya dejado sin defensa, en términos del mencionado artículo, debe, incluso ante la ausencia de conceptos de violación, analizar en su integridad el acto reclamado para luego determinar si es o no violatorio de garantías y, por ende, inconstitucional. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

- Amparo directo 351/96. J.J.J. Inmuebles del Mar, S.A. de C.V. 20 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar.
- Amparo en revisión 27/97. Héctor Ramiro Suárez Camacho. 20 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar.
- Amparo en revisión 107/97. Fernando Valdivia de la Serna. 27 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar.
- Amparo en revisión 844/97. José de Jesús Loza Hernández. 4 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretaria: Alicia Marcelina Sánchez Rodelas.
- Amparo en revisión 624/98. Banca Cremi, S.A. 25 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretaria: Alicia Marcelina Sánchez Rodelas.

[REDACTED]

**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito. **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo VIII, Noviembre de 1998. Pág. 485. **Tesis de Jurisprudencia.**

Por lo expuesto, A USTEDES CC. MAGISTRADOS atentamente solicito:

CUART

PRIMERO.- Tenerme por presentada a través del presente escrito, solicitando a nombre de mi representada, EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra del acto reclamado.

SEGUNDO.- Tramitar el procedimiento constitucional y en su oportunidad conceder a la Quejosa EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, para restituirla en el goce de sus garantías individuales.

PROTESTO LO NECESARIO Y A USTEDES CC. MAGISTRADOS MIS

RESPECTOS

Ciudad de Guadalajara, Jalisco

[REDACTED]